

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Lic. Ladislao López Negrete, en contra del Decreto de la Legislatura del Estado de Durango y su reglamento, por los que se expropia á sus representantes de casas y terrenos de la Hacienda de Güichapa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, dice: que en el presente juicio de amparo promovido por el ciudadano Lic. López en representacion de los dueños de la hacienda de Güichapa, hay que considerar, por una parte, el decreto de la Legislatura de 6 de Mayo que dió origen al recurso, y por otra, la ejecucion del mismo decreto.

En los casos de expropiacion que han verificádose en varios Estados, entre otros los que han tenido lugar en el de Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que pueden las Legislaturas declarar la utilidad pública, y decretar la expropiacion. Por esto el Fiscal, sin entrar á disentir si tales actos pertenecen á las atribuciones del poder Judicial ó del Legislativo, entiende que la Legislatura del Estado ha tenido facultad para expedir el decreto de que se trata, por el que declarando lugar público á la cabecera de la municipalidad de Güichapa, dispuso se expropiara á esta finca, del terreno necesario para la fundacion de la misma municipalidad.

Bajo este concepto, y como en el decreto referido se respetan los requisitos que para ocupar la propiedad sin el consentimiento del dueño, prescribe el artículo 27 de la Constitucion general, creo el que suscribo que no procede el amparo contra dicho decreto.

Pero no sucede lo mismo respecto de la ejecucion. El gobierno, al reglamentarlo, señaló para la expropiacion, medio sitio de ga-

nado mayor, medido desde el centro de la plaza nombrada del Bajo hácia el Poniente, ordenando se procediera el dia primero de Junio á la mensura, por el perito que el mismo gobierno nombrara, y reservándose, con vista del plano, arreglar con los dueños de la finca, tanto el valor de la propiedad ocupada, como los términos del pago. Y todo se ha verificado así, pues la ocupacion del terreno que señaló el Gobierno y midió su perito, incluso algunas fábricas de la hacienda, se ha llevado á efecto, segun las constancias procesales y las pruebas producidas por el quejoso; sin que hubieran precedido á la ocupacion, ni la intervencion de un perito nombrado por los dueños, ni el arreglo ó tasacion legítima del precio, ni menos la prévia indemnizacion.

En la ejecucion, pues, del decreto, se han desatendido, no solo los derechos que la ley comun asegura al propietario, de nombrar persona que mida y tase las cosas que se le obliga á enajenar, sino tambien la garantía de la prévia y justa indemnizacion, que expresamente le otorga el artículo veintisiete de la Constitucion general.

Por tanto, y siendo en el caso una verdadera violacion la falta de la indemnizacion prévia, el Fiscal cree que la justicia federal está en el deber de impartir á los dueños de la Hacienda de Güichapa el amparo que han impetrado, no precisamente contra el decreto de 6 de Mayo del corriente año, sino contra su ejecucion, por haberse esta verificado sin llenarse el mencionado requisito de la prévia indemnizacion.

Esto es su sentir, y hubiera deseado ampliar las observaciones que preceden en una cuestion tan grave como la presente, pero se lo han impedido las notorias enfermedades de que adolece hace algun tiempo; impidiéndole á la vez, extender su pedimento con la debida oportunidad, suplicando al Juzgado se sirva tomar en consideracion las causales expuestas que motivaron alguna demora en el despacho de este nego-

cio por parto del que suscribe.—Durango, Diciembre seis de mil ochocientos setenta.—(Firmado)—Vicente Castro.

Sentencia del Juez de Distrito de Durango.

Durango, Diciembre catorce de mil ochocientos setenta.—Visto este juicio de amparo promovido por el ciudadano Lic. Ladislao López Negrete en representación de los señores Fierro, de Guichapa, contra el decreto número 35 de la Legislatura del Estado, fecha 6 de Mayo del corriente año, y contra el reglamento del Ejecutivo del diez y seis del mismo mes: Vista la información presentada por el mismo apoderado, el alegato de buena prueba que con este motivo ha producido, las contestaciones que sobre el particular ha dado distintas veces el gobierno del Estado, y cuanto mas ver convino. Considerando: que la Legislatura del Estado ha tenido facultad para expedir el decreto de que se trata, por el que declarando lugar público la cabecera de la Municipalidad de Guichapa, dispuso que se expropiara á esta finca del terreno necesario para la fundación y construcción de las oficinas públicas de esa misma Municipalidad: Que esa facultad puede considerarse imbita entre las que le concede la fracción 4ª artículo 49 de la Constitución reformada del Estado, y que consiste, en legislar en todo lo relativo á la administración interior del Estado: Que esos conceptos, son relativos al establecimiento y erección de cabeceras de Partido y de Municipalidades, como lo demuestra claramente la ley orgánica de la materia, que bajo el número 152 promulgó en 15 de Mayo de 1863 la Legislatura constitucional de aquella época: Que al hacerse la expropiación de que se trata en este juicio, se fijó en el artículo 29 del decreto relativo la condición indispensable de *previa indemnización*: Que en consecuencia, la autoridad legislativa,

contra cuya determinación se solicita amparo, ha respetado y dado el lleno debido en esta vez á los requisitos que estableció, y con los que quiso garantizar la propiedad particular el artículo 27 de la Constitución general de la República, y el 24 de la particular del Estado: Que cuando dos leyes se encuentran opuestas, se entiende que la posterior deroga á la anterior: Que en ese caso se encuentran la ley reglamentaria de justicia de 9 de Octubre de 1861, y la Constitución del Estado sancionada el 25 de Mayo de 1863; siendo esta además, la ley fundamental á que deben de sujetarse todas las autoridades del mismo Estado: Que en consecuencia, no puede proceder el amparo que se solicita contra el decreto número 35 de la Legislatura actual.

Que lo contrario sucede, respecto del reglamento relativo á la ejecución que de dicho decreto ha dado el Gobierno del Estado, supuesto que ni ha habido la *previa indemnización que ordenó el Congreso*, ni se procedió al avalúo y medida de los terrenos en cuestión, sino por el solo perito nombrado por el Gobierno del Estado: Que aunque en el artículo 39 de dicho reglamento se hace la promesa de pagar con lo que enteren los particulares, y en el caso de que esto no sea posible, con lo que se pueda destinar á este objeto de los fondos públicos, esa simple promesa, no es en derecho *indemnizar previamente*.

Que por otra parte, el que es obligado á enajenar, tiene el derecho de nombrar por su parte un perito que avalúe y mida los terrenos de que se le expropia: Que en consecuencia de estas consideraciones, el reglamento de que se trata importa por *ahora* la violación del derecho de propiedad, que es el fundamento de toda sociedad constituida. Visto todo lo expuesto, el ciudadano Juez de Distrito del Estado, dijo: 1º Que no procede el amparo contra el decreto número 35 de la Legislatura del Estado. 2º Que de conformidad con el artículo 1º inciso 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, la justicia de la Nación mexicana, ampara

y proteje á los señores Fierro de Güichapa, contra el reglamento dictado por el Gobierno del Estado, para poner en ejecucion el mencionado decreto; disponiendo se publique esta sentencia en el periódico oficial, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 27 de la ley arriba citada, y se comuniqué al Gobierno del Estado para los fines consiguientes; haciéndose la correspondiente remision de estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Y por este auto definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó el ciudadano Juez de Distrito, por ante mí de que certifico (Firmado) *Gerónimo Sida.*—*Juan B. Arellano.*—secretario.

Escrito del C. Lic. Vallarta en que solicita se revoque la primera parte de la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Durango en 14 de Diciembre último, y que se declare que el amparo que ha pedido el Sr. Fierro procede no solo contra el reglamento del Gobierno de Durango de 16 de Mayo, sino tambien contra el decreto de la Legislatura del mismo Estado de 6 de ese mes, por haber ordenado una expropiacion sin indemnizacion previa.

CIUDADANOS MINISTROS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Ignacio L. Vallarta, en representacion del Sr. D. Fernando E. Fierro, segun consta del poder que exhibo, en el juicio de amparo que promovió por la expropiacion inconstitucional que ha sufrido de su hacienda de Güichapa, ante ese Tribunal respetuosamente expongo:

El Gobierno de Durango creyó conveniente remitir al Juzgado de Distrito, cuando el presente juicio estaba ya concluido, momentos antes de pronunciarse la sentencia definitiva, los documentos que forman el segundo cuaderno de estos autos. Por

mas que esos documentos exhibidos tan extemporáneos como ilegalmente, carezcan por completo de todo valor probatorio; por mas que algunos de ellos, los mas, sean defectuosos hasta ser informes, es lo cierto que mi poderdante no pudo ocuparse de ellos, ni en su alegato presentado cuarenta dias antes que los documentos se exhibieran, ni despues de la sentencia, por falta de tiempo para enviar su defensa directamente á esta Suprema Corte, como lo dispone el artículo 14 de la ley de 20 de Enero de 1869. Tal circunstancia ha obligado al Sr. Fierro á encargarme de esa defensa de sus derechos, y yo, cumpliendo con el deber que he aceptado, vengo ante este Tribunal á suplicarle que conceda el amparo ámplio y franco que se ha pedido, revocando la limitacion con que lo otorgó el inferior en su sentencia de Diciembre próximo pasado.

Leyendo estos voluminosos autos, se engendra en el ánimo la conviccion mas completa de que se ha violado por la Legislatura y por el Gobierno del Estado de Durango sucesivamente, una de las garantías mas preciosas que la Constitucion otorga tanto el decreto de 6 de Mayo de 1869 espedido por aquella, como el reglamento de 16 del mismo mes publicado por éste, mandan hacer la expropiacion de la hacienda de Güichapa, sin pagar antes su valor, como lo quiere el artículo 27 de la Constitucion; mas aún, la mandan hacer, ordenando explícitamente que la indemnizacion sea posterior al hecho de la ocupacion. El Juez de Distrito que así lo juzgó y resolvió con respecto al reglamento de 16 de Mayo, opinó otra cosa con relacion al decreto de 6 de ese mes, y concedió el amparo contra aquel y no contra este. Pero los hechos en este punto son tan claros; se ve con tal evidencia que la inconstitucionalidad del reglamento está engendrada en la del decreto; que para explicar la contradiccion en que el Juez ha incurrido, es necesario creer que á ello lo condujeron los respetos que á la Legislatura quiso guardar, la presion que en su ánimo ejercieron las influen-

cias de los que en la expropiacion de Güichapa están empeñados. . . . Ante esta Suprema Corte, en donde todo respeto y consideracion cede á los supremos que se deben á la ley fundamental de la República, no bastará demostrar que decreto y reglamento son igualmente anti-constitucionales, para que este Tribunal, lo mismo y por idéntica razon, invalide el acto del Gobierno y el de la Legislatura, y conceda el amparo contra esos actos, que han violado de un modo evidente el artículo 27 de la Constitucion. Esta demostracion, por fortuna, es demasiado fácil.

Dice el artículo 2º de ese decreto, esto literalmente: «*Prévia indemnizacion* correspondiente al valor de las plazas, calles, egidos y casas de cárcel, habitacion municipal y escuelas, se expropia á los dueños de dicha hacienda de la propiedad que importan estos valores raíces, y de los demas que necesite aquella municipalidad para el establecimiento y desarrollo de su régimen administrativo y económico; quedando á beneficio del fundo del pueblo de Güichapa la misma propiedad ocupada.» El artículo 3º se expresa así: «El Gobierno del Estado reglamentará la ejecucion de este decreto, allanando la indemnizacion prévia de que trata el artículo anterior, con los medios de que pueda disponer el erario, con los recursos de aquella municipalidad y con los que han ofrecido sus habitantes en la solicitud que motiva esta disposicion.»

Basta esto para persuadirse de que lo que la Legislatura llamó «indemnizacion prévia,» no era, ni podia ser, segun el texto mismo del decreto, sino una «indemnizacion posterior,» insegura, eventual y hecha de una manera sucesiva en cantidades parciales. Si el pago se habia de hacer «con los recursos de la municipalidad» para cuya ereccion la expropiacion se decretaba, ¿cómo puede llamarse «prévia» á lo que por la naturaleza misma de las cosas no podia ser sino «posterior»? ¿Cómo unos recursos municipales, que no podian ni existir, sino despues de hecha la expropiacion, de crigi-

do el municipio, de arreglada su hacienda, podian servir para hacer una «indemnizacion prévia,» á todos esos sucesos? ¿Cómo el Legislador, que la naturaleza de las cosas no puede cambiar; que la significacion jurídica, gramatical de las palabras no puede alterar, creyó que los productos de una cosa que no existen sino en el porvenir, pueden pagar préviamente el valor de esa cosa de que en el tiempo pasado se ha dispuesto? Todos los legisladores del mundo jamás podrán decretar que es «prévia indemnizacion» lo que por necesidad ha de ser «indemnizacion posterior?..... Y cuando el artículo 27 de la Constitucion exige aquella en la expropiacion, no ha dejado de seguro á nadie, ni al mismo Congreso de la Union, la facultad de no pagar de hecho y efectivamente al expropiado, *antes* de ocuparle su propiedad; no ha dejado á nadie el poder de alterar la significacion de las palabras, llamando «prévio» á lo que es «posterior» para así disponer de la propiedad particular sin pagarla antes. Estas observaciones, que no tienen respuesta, comienzan ya á demostrar que el decreto de 6 de Mayo viola el artículo 27 de la Constitucion.

Pero hay mas aún: los legisladores de Durango ofrecen otro medio de indemnizacion: «los recursos que han ofrecido los habitantes de Güichapa en la solicitud que motiva esta disposicion.» Esa promesa está concebida en estos textuales términos, en esa solicitud fechada en 1º de Noviembre de 1869: «... en caso de que su dueño sea expropiado del terreno, no pretendemos que pase *sin motivo justificado* de un propietario á otro, sino que ofreciendo pagar la justa indemnizacion ó el valor que tenga estimada por peritos, lo dejamos como *propio del fundo del pueblo*: por estas razones..... pedidos la H. Legislatura..... se sirva dictar la expropiacion..... y declarar que *prévia la indemnizacion* que ofrecemos, quede erigida una villa, etc.» (Fojas 4 del cuaderno 2º remitido por el Gobierno de Durango al Juez de Distrito). Fuera de es-

tas consideraciones que hacen ver que aquella promesa, de su condicion de promesa no ha pasado, hay un hecho que nadie negará y que demuestra que: "aquellos recursos" han distado mucho de constituir una indemnizacion previa, y ese hecho es esto: la ocupacion de la propiedad se hizo en 1º de Junio pasado y hasta hoy á su dueño no se ha dado un solo centavo de su valor!

Los signatarios de esa solicitud, son en su mayor parte, jornaleros de la hacienda, personas (casi se califican ellos mismos en su solicitud) «que vivimos en suelo ajeno, sometidos al favor del dueño de la hacienda» (Fols. 3ª cuad. citado): esos signatarios, alagados con la esperanza de tornarse en dueños siquiera de una pequeña parte de ese «suelo ajeno,» tan pobres de elementos pecuniarios, como pródigos de promesas de indemnizar, previamente, ofrecieron recursos para hacerlo, recursos con que el legislador de Durango contó para cumplir el precepto del art. 27 de la Constitucion. Pero; ¿puede seriamente sostenerse que la promesa que cien jornaleros hacen de pagar al contado y anticipadamente el valor de una hacienda, sea otra cosa que una estéril promesa? ¿Puede, no ya un legislador, sino cualquier hombre de negocios creer en esa promesa hasta el extremo de fundar en ella el cumplimiento de un compromiso de honor, el cumplimiento de un mandato constitucional? Quien nada posee, ¿cómo ha de poder pagar previamente la cosa que desea adquirir, sobre todo cuando su valor es considerable!

Los hechos se han encargado de justificar plenamente el pronóstico que desde el principio pudo asegurarse, de que la promesa que hicieron los habitantes de Güichapa, distaba muchísimo de ser la fuente de recursos que facilitaria la indemnizacion previa.

El Gobierno de Durango, en 19 de Setiembre pasado dirigió este oficio, que recomendando á la atencion del Tribunal, al gefe del partido de San Juan del Rio. «Es llegado el caso de que vd. haga saber á los

vecinos de Güichapa, por disposicion del ciudadano Gobernador, que deben ya concurrir con las cantidades que por conducto del C. Diputado Francisco Escobar y Vazquez ofrecieron para la indemnizacion debida á los dueños de aquella hacienda ~~por~~ por la expropiacion que se les hizo ~~para~~ para erigirla en lugar público.» Nótese bien como en esos pocos renglones se confiesan estos dos hechos capitales: primero, que la expropiacion estaba ya hecha, y segundo, que aun no se habia pagado la indemnizacion.

Y bien: ¿qué contestaron esos vecinos? Hélo aquí: en 10 de Octubre dijo el gefe municipal de Güichapa, que habia recibido la Orden para que los vecinos concurren ya con las cantidades que ofrecieron para la indemnizacion de los dueños de Güichapa, ~~por~~ por la expropiacion que se les hizo; ~~se~~ y en respuesta manifestó que «con la debida actividad recojeria las cantidades ofrecidas, y que tan luego como volvieran algunos de los vecinos comprometidos que se encontraban en la feria del Valle, los excitaria para que satisfagan lo que les correspondo, aplazándose para entonces dar cuenta con el resultado.» (Fols. 62 frente del cuad. 1º) El Gobierno contestó de enterado el 13 de Octubre, y es lo cierto, que despues de haber sido hecha la expropiacion, esos vecinos comprometidos, hasta hoy no han pagado al dueño de Güichapa ni siquiera las propiedades que entre ellos se han repartido á la sombra del decreto de 6 de Mayo!.....

Estériles como eran, como de hecho han sido hasta hoy, los que de esa promesa y del fundo municipal de Güichapa podian venir, no ya antes, sino aun despues de la ocupacion de la propiedad, todavia la legislatura, que bien calculó su esterilidad, asignó los medios de que pueda disponer el erario para allanar la indemnizacion previa.» Es una desgracia que el erario de Durango, no haya podido hasta hoy disponer de medio alguno para hacer un pago que el art. 27 de la Constitucion exige que estuviera

hecho desde antes del 19 de Junio pasado; pero tal desgracia es un hecho, del que dá testimonio la circunstancia que ya he mencionado; la de que hasta hoy el dueño de Güichapa no ha recibido un solo centavo del valor de su finca!

Pero sin parar la atencion en ese hecho elocuentísimo, nadie puede dudar, que expropiar para pagar con los medios de que el erario pueda disponer, es indicar muy claro, no solo que la indemnizacion no es *prévia*, sino que esa indemnizacion posterior, se *convierte en crédito* contra el erario, sujeto á todas las vicisitudes, depreciaciones, &c., á que la deuda pública está sujeta. El estado de nuestro erario es fatal, lo mismo aquí que en Durango; verdad es esta que no se puede por desgracia poner en duda. Cuando los sueldos de los empleados apenas se pagan; cuando los gastos de administracion apenas se hacen; cuando año tras año hay un *deficiente* en el presupuesto, que á buen componer, se convierte en certificados de la deuda pública, certificados que aquí valen solo el 6 por ciento de pago, ¿se podría de manera alguna sostener que la indemnizacion que se ha de hacer *con los medios de que el erario pueda disponer*, está ajustada al precepto constitucional? Cuando este quiere que la propiedad no sea ocupada sin dar *antes* á su dueño su valor efectivo equivalente, ¿se podrá decir que un crédito contra el erario, en el estado que hoy guarda este, constituya ese valor equivalente?.....

Y aunque de prueba no necesita ese hecho desgraciado que palpamos, la imposibilidad que tiene el erario de hacer sus pagos todos, á mayor abundamiento mi poderdante quiso acreditarlo. Tres testigos mayores de toda excepcion, han declarado que los fondos del Estado de Durango no bastan ni aun para cubrir con regularidad los sueldos de los empleados, y que menos se podría con esos fondos pagar la indemnizacion. (Interrogatorio de fojas 24 y declaraciones de fojas 52 y 53). En tal estado de cosas, decretar una indemnizacion «con los medios

de que pueda disponer el erario,» es no solo confesar que ella no será *prévia*, sino que ella se hará hasta en abonos, que ella, si el acreedor no es muy feliz, quedará convertida en un crédito contra el erario, crédito que vale la vigésima parte de su importe.... ¿Puede seriamente sostenerse que esto sea la indemnizacion *prévia* de que habla el art. 27 de la Constitucion?

Preciso es deducir de todas estas observaciones, que la Legislatura misma abundó en el convencimiento de que la indemnizacion no podía ser *prévia*, sino á lo sumo y llenando todo bien, posterior á la ocupacion de la propiedad. Cuando la abundancia de los fondos de la municipalidad la hicieran posible, cuando los peticionarios hicieran economías con el producto de la cosa expropiada y que ellos han querido adquirir, cuando las atenciones del erario lo permitieran, entonces se haría la administracion; pero por desgracia, las cosas no han ido tan bien como la Legislatura lo creyó, y ni el erario ha tenido desahogo, ni los peticionarios economías, ni el municipio abundancia, y el triste resultado de todo esto, ha sido que no ha habido indemnizacion ni *prévia* ni posterior á la ocupacion! La que la Legislatura decretó, aunque se llamó *prévia*, fué insegura, eventual, y hecha, caso que se hiciera, de una manera sucesiva en cantidades parciales, segun que el municipio, el erario, ó los peticionarios pudieran ir haciendo abonos: los hechos se han encargado de probar que la Legislatura se engañó aun en sus cálculos sobre esa indemnizacion de evidencia inconstitucional.

Hemos visto, que el texto mismo del decreto persuade de que él viola el art. 27 de la Constitucion; pero para aclarar mas este punto, para *destacar* de una manera aun mas saliente el pensamiento de la Legislatura sobre que la indemnizacion que llamó *prévia*, no podía ser sino posterior, parcial, sucesiva, citaré las palabras mismas del dictámen de la comision que propuso el decreto de que hablo, y dictámen que aprobó la Legislatura. Examinando esa comi-

sion este punto: «¿Ofrece dificultades la expropiación por la indemnización previa que debe hacerse al dueño?» se expresa así: «los dueños de la hacienda son varios..... lo cual facilita la indemnización porque no es lo mismo indemnizar por fracciones, que satisfacer á un solo dueño todo el valor raíz que se le tome.» (Hé aquí confesada la intención de que la indemnización debía ser posterior, parcial y sucesiva; primero á unos dueños y luego á otros): «la indemnización puede además facilitarse, dice la comisión, con los adeudos de las contribuciones que cause la hacienda»: (tal indemnización no puede ser sino posterior): «también puede hacerse, continúa hablando la misma comisión, con las rentas de la municipalidad ~~según~~ según que se vayan produciendo, y después de satisfechos sus propios gastos, sobre lo que se puede dar á los dueños del fundo libramientos á plazo, ~~según~~ &c.» (Fojas 68 y 69 del 2º cuadro). ¿Puedese á todo esto llamar «indemnización previa?» ¿Puedese dudar que el decreto de 6 de Mayo mandó hacer una expropiación, ordenando que la propiedad no se pagara antes, sino después de la ocupación? ¿Puedese decir que esto no es la manifiesta y flagrante violación del precepto constitucional?

El Reglamento del Gobierno de 16 de Mayo se inspiró en la letra, en el espíritu del decreto, y no hizo mas que consignar de un modo claro y explícito las disposiciones inconstitucionales del decreto. Dijo ese Reglamento, que el pago se haría «con los fondos públicos del Estado,» promesa que dista muchísimo de ser una indemnización previa, anterior á la ocupación de la propiedad; promesa que no se ha cumplido aún, siendo así, que la expropiación hace seis meses que existe; promesa, en fin, que no llena la exigencia constitucional. Al cometer tal violación de garantías el Reglamento, no hizo mas que seguir las indicaciones terminantes del legislador para hacer el pago á plazo, cuando el erario tuviera con qué pagar, después de satisfechos sus pro-

prios gastos. Si el Reglamento es notoriamente inconstitucional, ¿cómo pudo el juez de Distrito que así lo juzgó, incurrir en la contradicción de creer constitucional al Decreto de donde él emana, al Decreto que inspiró la inconstitucionalidad del Reglamento? No se concibe de verdad esa contradicción, cuando con evidencia se ve, que en tanto el Reglamento hizo solo una promesa de pago posterior, en lugar de la indemnización previa, en cuanto que el decreto adulterando el valor de las palabras, mandó que no se indemnizara sino con esa promesa de pago posterior. Si el amparo contra el Reglamento procede, como es indisputable, como lo declaró el juez, la fuerza irresistible de la lógica lo hace igualmente procedente contra el decreto que causó la violación de las garantías.

Me permito llamar la atención de la Suprema Corte sobre todas y cada una de las disposiciones de ese Reglamento: él consagra la iniquidad de que en las enajenaciones forzosas, solo un contrayente, el Gobierno, tiene el derecho de nombrar perito que mida las tierras: él manda que se ocupen las casas de la hacienda de Guichapa, para enajenarlas después con arreglo á las leyes de nacionalización; él ordena que el valor de la propiedad no sea el que intrínsecamente tenga, ni siquiera el convencional que las necesidades del comercio designen, sino el valor autorio que sirve para el pago de contribuciones,..... y esto sin consideración alguna á los perjuicios que por necesidad se causan al dueño de una hacienda á quien se mutila su propiedad tomando la parte principal de ella, el casco de la hacienda, y dejando tal vez sin valor y sin uso lo restante. El artículo 27 de la Constitución no se aviene de seguro con tanta falta de respeto á la propiedad! ¡Desgraciado el país en que la autoridad puede comprar las cosas ajenas, fijando ella sola sus precios, su extensión, calidad, etc., etc.!

He calificado de informes la mayor parte de los documentos que el Gobierno remitió tan estemporáneamente al juez de

Distrito, y debo acreditar esa importante asercion. De la foja 82 á la 88 hay una informacion que no puede ni llamarse *ad perpetuam*, que está recibida con infraccion de toda ley sobre esta materia, que está en copia ~~no~~ certificada por dos personas que carecen de toda investidura pública. ~~Y~~ ¡Y la tal copia no está siquiera en papel sellado! De la foja 90 á la 104 hay otra informacion que adolece de los mismos vicios que la anterior: faltan en ella desde la citacion de la parte contraria, hasta el papel sellado. De la foja 106 á la 113 se vé la copia de un "discurso" que tambien viene impreso en las fojas de la 73 á la 79. El documento de las fojas 114 y 115 es anónimo: los de las 116 á 120 son copias que nadie certifica..... ¿No es verdaderamente informe todo esto?

Con los certificados visibles en las fojas de la 122 á la 125 parece que se trató de acreditar que la expropiacion no estaba hecha: esos certificados merecen un exámen mas minucioso.

Todos ellos son iguales: están fielmente copiados de un padron *á última hora* formado: ellos hablan de las casas en que se debia poner la cárcel, la escuela, la tesorería municipal, etc.; pero nada dicen de las casas que forman el casco de la hacienda y que los vecinos como dueños poseen ya; nada del terreno cuyo uso se ha prohibido al propietario de Gülichapa. Esos certificados, en fin, están suscritos por los ciudadanos Jesus Villareal, Ignacio Camargo, Rafael Silva y Teodoro Valenzuela, y esos ciudadanos son nada menos que los primeros signatarios de la solicitud de 19 de Noviembre, (véase la foja 5), los mas empeñados en que la expropiacion se haga..... Bastan estas breves indicaciones para que este Tribunal juzgue del valor probatorio de tales certificados.

Pero urge saber si la expropiacion se consumó ya: es necesario aclarar este hecho capital que esos certificados quisieron entenebrecer, ya que no pudieron negar. En autos está ese hecho plenamente acreditado.

Es en Durango tan notorio ese hecho que nadie lo ignora: el fiscal en su pedimento de 11 de Julio, lo refiere como indudable (Fojas 2 vta.) el juez en su auto de 14 del mismo mes lo confiesa: «Considerando, dice, que practicada como está la medida y ejecutados varios otros actos relativos á la expropiacion decretada, no seria prudente suspenderla, etc., (Fojas 23 vta.) El gobierno, no una, sino varias veces, manifiesta que ~~no~~ la expropiacion ya se hizo. ~~Se~~ (Véase entre otros el oficio del secretario del gobierno de 19 de Setiembre pasado, en la foja 62 fto.) ¿Cómo se atrevieron los signatarios de los certificados, á pesar de su interes en el negocio, á oscurecer la notoriedad de ese hecho?

Pero no es esto todo: diez testigos contestan dos las preguntas 3ª, 5ª, 6ª y 7ª del interrogatorio de fojas 38, declaran uniformemente estos hechos: en los primeros dias de Junio un solo perito nombrado por el gobierno midió los terrenos, materia de la expropiacion: desde esa fecha la autoridad ha impedido el uso de esos terrenos al propietario, y ha dispuesto de ellos repartiéndolos á varios vecinos: desde entonces la misma autoridad se ha adueñado de las casas que ha querido, y los vecinos de la hacienda desde entonces están poseyendo como propietarios las fincas que se les han repartido. (Declaraciones de la foja 40 vta, á la 47 vta.) ¿Se podrá aun dudar siquiera si la expropiacion es ó no un hecho consumado? ¿Podrán los defectuosísimos documentos remitidos por el gobierno al juzgado tan fuera de tiempo, sostener racionalmente esa duda cuando menos?

Consumada, pues, como está la ocupacion de la propiedad, sin indemnizacion, ni previa, ni posterior hasta ahora, (esto consta tambien de las declaraciones á que me acabo de referir) y todo esto en virtud del decreto de 6 de Mayo, que explícitamente mandó que el pago se hiciera no antes, como la constitucion lo manda, sino despues de la ocupacion de la hacienda, cuando el erario pudiera hacerlo, ó cuando los veci-

nos quisieran cumplir su promesa, ¿no es de evidencia inconstitucional tal decreto? ¿No viola de un modo flagrante el art. 27 de la Constitución y las garantías que él otorga?....

Es preciso aun ver este punto bajo otro aspecto: gasta el juez de Distrito otro género de argumentaciones para decidir que el amparo no procede contra el decreto de 6 de Mayo. Sostiene que á pesar de haber una ley en Durango que consigna al poder judicial el conocimiento de las causas de expropiación, (art. 73, fracción 2ª de la ley de 9 de Octubre de 1861, que está testimoniada en autos en la foja 32 fte.) ella está derogada por el art. 49 de la Constitución del Estado, que faculta á la legislatura para legislar en lo relativo á la administración interior del mismo Estado, y de aquí concluye que la facultad de expropiar es solo legislativa y no judicial, motivo por el que la legislatura ha tenido facultad para expedir el decreto de que se trata. Es conveniente hacer siquiera breves indicaciones sobre este particular.

No existe aun la ley orgánica del artículo 27 de la Constitución, y en consecuencia no está aun determinado por la ley federal *qué autoridad* debe decretar la expropiación. Entrar en el exámen de este punto, sería cuando menos inconducente aquí, porque solo al congreso de la Unión toca resolverlo; pero en la falta de ley federal, puédese conceder que á las leyes de los Estados habrá siquiera interinamente que atenderse para resolver las cuestiones que entretanto surjan: siendo esas leyes tan diversas como las legislaciones particulares de cada Estado, no todos los casos que hoy se presenten se pueden resolver del mismo modo. Mientras en Durango las causas de expropiación son judiciales, en Jalisco son administrativas, siendo el gobernador quien de ellas conoce. (Art. 28, fracción XI de la constitución de Jalisco,) y en Veracruz se oye al interesado, al síndico del ayuntamiento respectivo, y despues califica el congreso la utilidad pública, y la indemnización se hace á juicio

de hombres buenos nombrador por el gobierno y por la parte. (Art. 51, frac. 2ª de la constitución de Veracruz.)

Concedido, pues, que la ley local y no la federal, que aun no existe, tenga que designar la autoridad que deba decretar la expropiación, veamos si la de Durango atribuye esa facultad á la legislativa, como el juez lo decidió, ó á lo judicial, como mi poderdante lo ha sostenido.

El art. 49 de la Constitución de ese Estado faculta al Congreso para legislar, ¿pero expropiar es un acto esencial y claramente legislativo? Afirmarlo, es dar por supuesto lo mismo que se disputa, vicio lógico en que el juez ha incurrido al resolver que ese artículo ha derogado el 73 de la ley de 9 de Octubre de 1861. Y ese vicio es tanto mas perceptible aquí, cuanto que muchas y graves razones se pueden aducir para demostrar que la venta forzosa que se llama expropiación, no es un acto legislativo: la diversidad que sobre este punto presentan las leyes locales, es la prueba concluyente de que no se cree de un modo indudable que expropiar sea legislar.

Siendo esto así, es evidente que para que la Constitución de Durango hubiera quitado al tribunal pleno la competencia que segun sus leyes tiene para entender en las causas de expropiación, era preciso que así lo hubiera mandado expresamente la misma Constitución; que ella hubiera quitado al poder judicial esa facultad y encomendársela á otro poder. Y lejos de haberlo así hecho, se contenta con consignar en su art. 24 este principio. "Es inviolable el derecho de propiedad; la que no podrá ser ocupada sino previa la correspondiente indemnización y tan solo por causa de utilidad pública." Y lejos de inferirse de este precepto que él deroga el art. 73 de la ley del 9 de Octubre que dió al poder judicial la facultad de conocer de las causas de expropiación, de él se deduce firmisivamente que no quiera la Constitución local hacer reforma alguna sobre este punto á las leyes anteriores.

Ahora bien: si no existe aun la ley federal que determine la autoridad que deba hacer la expropiacion, y si en falta de ella hay que atenerse á la ley local; sabiendo, como ya sabemos, que en Durango el Tribunal pleno es esa autoridad: que la ley de Octubre así lo dice textualmente y que la Constitucion de ese Estado no ha derogado tal ley, ya podemos con seguridad inferir que la legislatura que mandó hacer la expropiacion no es la autoridad para ello determinada por la ley. Esta última conclusion nos lleva á ver como por otro capítulo se ha violado el art. 27 de la Constitucion de la República en este caso, en que ya consta que la autoridad que no ha determinado ley alguna, fué quien la expropiacion decretó.

Estas demostraciones sirven bien para impugnar las argumentaciones expendidas para negar el amparo contra el decreto de la Legislatura; pero sabiendo ya que aunque esta hubiera tenido la facultad de expropiar, nunca pudo hacerlo, como lo hizo, indicando, ordenando que la indemnizacion fuera posterior á la ocupacion de la propiedad, no se puede vacilar ni un instante en calificar á aquel decreto como atentatorio de las garantías individuales, como derogatorio en el caso especial de que se ocupa el art. 27 de la Constitucion federal.

Demostrada esta verdad, como creo que lo está, y probado tambien hasta la evidencia con las incontestables razones expuestas por mi poderdante en su alegato de 29 de Octubre, que hago mio, que el reglamento de 16 de Mayo importa la misma infraccion constitucional, los mismos motivos que al juez obligaron á conceder el amparo contra el reglamento, exigen imperiosamente que ese amparo se otorgue contra el Decreto: que igual declaracion de inconstitucionalidad recaiga sobre ambas disposiciones: que la misma sentencia resuelva, qué decreto y reglamento mandan hacer una expropiacion sin indemnizacion prévia, para que así la propiedad del Sr. Fierro no quede expuesta á ser ocupada ni en virtud

del Reglamento ni en virtud del Decreto que infrinjen la Constitucion. Los respetos que el juez quiso guardar á la legislatura, con menoscabo de los que á la ley fundamental del país debe, son gravemente perjudiciales á mi poderdante, porque vigente el Decreto, la expropiacion se consumará, sin indemnizacion prévia como él manda, y mucho mas trancedentales al orden público, porque desde el momento que se consiente que una ley inconstitucional surta efecto alguno, la Constitucion de la República solo será una letra muerta.

Es, pues, de rigorosa justicia, otorgar el amparo amplio y franco que el dueño de Güichapa ha pedido contra el Reglamento de 16 de Mayo y contra el decreto de 6 de ese mes, contra los actos inconstitucionales de que se ha quejado y que se han ejecutado en virtud de lo mandado por esas disposiciones legislativas: es de rigorosa justicia declarar que el amparo puede contra ambas, para que así, como lo manda el art. 23 de la ley de 20 de Enero de 1869 «se repongan las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitucion,» esto es, al 6 de Mayo último, día en que la legislatura de Durango decretó que se ocupara una propiedad, sin indemnizarla préviamente.

Por las razones expuestas ruego respetuosamente á este tribunal se sirva así resolverlo, revocando la primera parte de la sentencia de 14 de Diciembre. Así es de justicia que pido, protestando lo necesario.

México, Enero diez de mil ochocientos setenta y uno.—*J. L. Vallarta.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

Visto el Juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Durango, por el ciudadano Lic. Ladislao López Negrete, en representacion de los dueños de la hacienda de Güichapa, contra el decreto

de 6 de Mayo último, de la Legislatura, y el Reglamento de 16 de Mayo publicado por el gobierno del mismo Estado, sobre expropiacion de una parte de la referida hacienda, quejándose de que con esas providencias se ha violado en las personas de los interesados la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitucion general. Visto el informe de que habla la ley, lo pedido por el promotor, los alegatos del quejoso, la sentencia del inferior pronunciada en 14 de Diciembre próximo pasado, por la que se declara: 1º que no procede el amparo contra el decreto número 85 de la Legislatura del Estado. 2º Que de conformidad con el artículo 1º, inciso 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, la justicia de la nacion Mexicana ampara y protege á los señores Fierro de Guichapam, contra el Reglamento dictado por el Gobierno del Estado, para poner en ejecución el mencionado decreto, disponiéndose se publique esta sentencia por el Periódico oficial, con todo lo demás que de autos consta y convino ver. Considerando en cuanto al decreto de la Legislatura: que dicho decreto es estrictamente conforme y arreglado á las prevenciones del artículo 27 de la Constitucion federal; porque está plenamente probado, que hay, no solo utilidad pública, sino verdadera y absoluta necesidad de ocupar la propiedad particular con objeto de proveer á la Municipalidad de Guichapam de los edificios indispensables para establecer sus oficinas, y el terreno preciso para constituir su fondo legal, por lo que la Legislatura ha mandado ocupar solamente los edificios y el terreno preciso para constituir su fondo legal; pues la palabra "necesario," de que usa al hablar de terreno, debe entenderse en su sentido legal, porque la misma Legislatura ha cuidado de exigir que la ocupacion se haga conforme á las reglas por derecho establecidas; es decir, previa designacion, medicion y justificacion de los edificios y del terreno, y previa la indemnizacion real y efectiva de sus valores, y porque en fin, ha respetado el derecho que los dueños tienen

para alegar los que les competan al tratarse de la medicion del terreno y de la fijacion del precio, así de este como de los edificios de cuya ocupacion se trata: Considerando en cuanto al Reglamento expedido por el Gobierno del Estado; que en él ha sido visiblemente contrariada la intencion expresa de la Legislatura, porque quita á la indemnizacion el carácter de previa; y no solo la hará posterior, sino tambien eventual y en extremo difícil, porque desconoce el derecho de los dueños para intervenir por medio de un perito, en la medicion y avalúo de las fincas y terreno de cuya expropiacion se trata, porque ha designado una extension tal de terreno, que excede, y con mucho, á lo que legalmente corresponde por fundo legal, y porque en fin, ha alterado todas las condiciones que impuso la legislatura y exige el citado artículo 27 de la Constitucion: Considerando en cuanto á los actos posteriores del mismo gobierno del Estado: que ha cometido verdaderamente atentados, pues no solo designó una cantidad excesiva, sino que lo hizo medir sin intervencion ni audiencia de los dueños; hizo la designacion de precio de una manera que no es la establecida por las leyes; consumó la ocupacion y efectuó la reparticion sin hacer efectiva la indemnizacion, siendo así que sin ésta no debia proceder á aquellas. Considerando, en fin: que por indemnizacion previa se entiende el pago anterior á la ocupacion, ó por lo menos la conformidad del interesado, mediante la cual se dé por recibido del valor de la cosa, de cuya ocupacion se trata. Por tales fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró: que la justicia de la Union ampara y protege á los quejosos, contra el Reglamento y los actos posteriores de él emanados.

Devuélvanso las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así, por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros

que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*José María Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*José M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Leon Guzman.*—*Lic. Juan A. Mateos,* secretario.

Son copias que certifico. México, Enero 18 de 1871.

RESOLUCION

De la Suprema Corte de Justicia en la consulta propuesta por el Juzgado de Distrito de Sinaloa sobre la ejecución de la sentencia de amparo pronunciada por la misma Corte, en 25 de Julio de 1870, referente á la posesion de las minas Estaca y Descubridora.

México, Enero trece de mil ochocientos setenta y uno.—Examinadas las diligencias remitidas por el Juzgado de Distrito de Sinaloa, sobre la ejecución de la sentencia pronunciada por esta Suprema Corte en 25 de Julio último; referente á la orden dada por el Ejecutivo de aquel Estado, sobre las minas de la *Estaca y Descubridora*: teniendo presente que al llegar al Juzgado de Distrito de Sinaloa, la ejecutoria de la Corte, los tribunales del Estado que tenían conocimiento del juicio de despojo entablado por los Gaxiolas, ya habían fallado en definitiva, mandando restituir á las personas contra quienes se concedió el amparo, en la posesion de las minas, por cuyo motivo el Juzgado de Distrito elevó consulta á la Suprema Corte, teniendo presente que los actuales poseedores conservan la tenencia de las minas, no ya en virtud de la orden del Ejecutivo, anulada por la sentencia de la Corte, sino por determinacion judicial, contra la cual no se ha solicitado el amparo:

que en el presente caso, y despues de la declaracion de los tribunales de Sinaloa, ha cesado la causa que motivó el recurso de amparo, sin que por esta circunstancia se haya privado á los quejosos de los recursos que otorgan las leyes y la Constitucion de la República; dígase al juez de Distrito de Sinaloa, en respuesta á su consulta de 7 de Noviembre último, que el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia, contra el acto del Gobernador que ejerció facultades judiciales, es una ejecutoria irrevocable; pero que no puede alegarse ni surtir sus efectos respecto de los actos del poder judicial, y contra los cuales las partes tienen expeditos [los recursos que la Constitucion y las leyes les conceden. Una rúbrica del ciudadano ministro García Ramírez.—*Lic. Juan A. Mateos,* secretario.

Es copia. México, Enero 18 de 1871.

—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO.

Juicio promovido por Jesus Gonzalez en el Juzgado de Distrito de Guadalajara por prision arbitraria.

DEMANDA DEL QUEJOSO.

C. Juez de Distrito:

Jesus Gonzalez, preso en la cárcel de detenidos de esta capital, á vd. respetuosamente expongo:

Que desde el 15 de Marzo de este año, estoy detenido á disposicion del ciudadano Gefe político del primer canton, sin que hasta esta fecha se haya dictado contra mí un auto motivado de bien preso, ni se me haya consignado á juez alguno.

Que mi familia está careciendo de los recursos que yo le proporcionaba con mi trabajo personal, y por consiguiente está sufriendo los males gravísimos que ocasiona la miseria.

Y por último, que el ciudadano jefe po-